

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

- 5 PLAZAS DE TÉCNICA/O MEDIO DE GESTIÓN (4 plazas por el TLO, 1 de las plazas para el turno libre de reserva para personas con discapacidad física o sensorial TLDIS)

PRIMERA PRUEBA

17 de marzo de 2023

PRIMERA PRUEBA CINCO PLAZAS DE TÉCNICA/O MEDIO DE GESTIÓN (T.L.)

1.- La Sección 1ª del Capítulo segundo del Título I de la Constitución tiene por epígrafe:

- a) De los derechos y deberes fundamentales.
- b) Derechos y libertades.
- c) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- d) De los derechos y deberes de los ciudadanos.

2.- La actual Constitución española:

- a) Fue sancionada y promulgada el 29 de diciembre de 1978.
- b) Fue sancionada el 27 de diciembre de 1978 y promulgada el 29 de diciembre de 1978.
- c) Fue sancionada y promulgada el 27 de diciembre de 1978.
- d) Fue promulgada el 27 de diciembre de 1978 y sancionada el 29 de diciembre de 1978.

3.- De acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión:

- a) Garantizar la soberanía e independencia nacional, defender las fronteras de España y los derechos y libertades.
- b) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
- c) Garantizar la unidad de la Nación española y defender su territorio.
- d) Garantizar la soberanía y unidad de España y defender a sus ciudadanos.

4.- Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
- b) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio constitucional y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
- c) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio general del derecho y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
- d) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un derecho fundamental y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

5.- Según el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) Corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
- b) Cualquier persona está legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
- c) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.
- d) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

6.- De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón:

- a) Se establecerá, al menos, un piso tutelado en cada provincia de la Comunidad Autónoma.
- b) Se establecerá, al menos, un piso tutelado en cada comarca de la Comunidad Autónoma.
- c) Se establecerá, al menos, un piso tutelado en cada municipio mayor de 5.000 habitantes de la Comunidad Autónoma.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7.- ¿Crea la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, un servicio de atención psicológica a hombres con problemas de control y violencia en el hogar?:

- a) No.
- b) Sí, correspondiendo su prestación al Instituto Aragonés de la Mujer.
- c) No, pero prevé su creación por el Gobierno de Aragón en el plazo máximo de un año a partir de la publicación de la Ley.
- d) Sí, correspondiendo su prestación a los servicios sociales comunitarios.

8.- De acuerdo con el artículo 147.1 de la Constitución, los Estatutos de Autonomía:

- a) Serán la norma fundamental de la Comunidad Autónoma y una ley del Estado.
- b) Serán una norma autonómica y una norma integrante del ordenamiento jurídico estatal.
- c) Serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
- d) Serán una ley de la Comunidad Autónoma y una ley orgánica aprobada por el Estado.

9.- El artículo 143.1 de la Constitución permite que se constituyan en Comunidad autónoma:

- a) Las provincias limítrofes.
- b) Las islas.
- c) Las provincias con características comunes.
- d) Los territorios insulares.

10.- El Estatuto de Autonomía de Aragón consta de:

- a) Un título preliminar y ocho títulos.
- b) Un título preliminar y nueve títulos.
- c) Un título preliminar y diez títulos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11.- El Estatuto de Autonomía de Aragón fue promulgado el 10 de agosto de 1982 y ha sido objeto de:

- a) Una reforma.
- b) Dos reformas.
- c) Tres reformas.
- d) Cuatro reformas.

12.- El epígrafe del Título V del Estatuto de Autonomía de Aragón dice:

- a) Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- b) Competencias de la Comunidad Autónoma.
- c) La Administración Pública en Aragón.
- d) Organización territorial y gobierno local.

13.- De acuerdo con el artículo 105. b) de la Constitución, la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte entre otras cosas:

- a) A los secretos oficiales.
- b) Al honor e intimidad de las personas.
- c) A la averiguación de delitos y faltas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14.- De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos:

- a) 10.000 habitantes.
- b) 5.000 habitantes.
- c) 1.000 habitantes.
- d) 500 habitantes.

- 15.- De acuerdo con el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos:**
- a) Dos años desde la adopción del convenio de fusión.
 - b) Cinco años desde la adopción del convenio de fusión.
 - c) Diez años desde la adopción del convenio de fusión.
 - d) Quince años desde la adopción del convenio de fusión.
- 16.- De acuerdo con el artículo 70 bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por un porcentaje de vecinos del municipio en función de su población. Si se trata de municipios a partir de 20.001 habitantes ese porcentaje es:**
- a) El 20 por ciento.
 - b) El 15 por ciento.
 - c) El 10 por ciento.
 - d) El 5 por ciento.
- 17.- Conforme a la Norma Española UNE 178104:2017 Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente Requisitos de interoperabilidad para una Plataforma de Ciudad Inteligente, cual de las siguientes opciones no es objeto de esta norma:**
- a) Identificar los componentes y módulos necesarios para dotar de las funcionalidades requeridas a la ciudad y situarlos en el Modelo de Capas.
 - b) Definir los requisitos que deben cubrir estos componentes, a nivel de interoperabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, etc.
 - c) Establecer un conjunto de patrones para la creación de un cuadro de mando de gestión que mida el desempeño de los servicios urbanos.
 - d) Identificar las capacidades que debe tener una plataforma de ciudad.
- 18.- Una Carta de Servicios es un documento por el que una unidad del Ayuntamiento de Zaragoza:**
- a) Informa a la ciudadanía sobre los servicios que presta.
 - b) Informa a la ciudadanía sobre la forma de presta sus servicios.
 - c) Informa a la ciudadanía sobre los compromisos de calidad que asume para proporcionar un mejor servicio.
 - d) Todas las anteriores son correctas.

19.- Según el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cual de las siguientes afirmaciones no es correcta?:

- a) Corresponde al sector privado impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos.
- b) La mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa.
- c) La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española.
- d) La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona.

20.- Según el artículo 32 “Bloqueo de los datos” de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a la revisión anual de la calidad de los mismos por un periodo no inferior a tres meses. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.
- b) El bloqueo de los datos consiste en la publicación de los mismos a partir de un proceso de encriptación definido por el encargado del tratamiento.
- c) El bloqueo de los datos afectará únicamente a la capa de presentación de datos en virtud del principio de transparencia de la información.
- d) La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo.

21.- Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo:

- a) Se regirán por lo previsto en la normativa de extranjería y asilo y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LRJSP.
- b) Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LPAC.
- c) Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LPAC.
- d) Se regirán por lo previsto en la Ley 4/2000, de 1 de febrero y el Real Decreto 629/2022, de 26 junio, por el que se modifica el Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y asilo y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la LPAC.

22.- Conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus tramites y deberá respetar:

- a) Los principios de concentración de trámites y oficialidad.
- b) Los principios de legalidad y carácter contradictorio.
- c) Los principios de sometimiento a la ley y eficacia.
- d) Los principios de transparencia y publicidad.

23.- El art. 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) regula:

- a) La ampliación de los plazos vencidos en los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares.
- b) La ampliación de los plazos no vencidos en los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares.
- c) La tramitación de urgencia cuando razones de interés público lo aconsejen.
- d) La ampliación de los plazos no vencidos, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda.

24.- En los supuestos de práctica de notificaciones en papel, cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá:

- a) La posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. (art. 42.3 de la LPAC).
- b) La posibilidad de que la comunicación de los trámites de la fase de instrucción se realice por medios electrónicos, o en soporte papel. (art. 43.1 LPAC).
- c) La posibilidad de que las comunicaciones de los trámites de audiencia al interesado y prueba se realice por medios electrónicos. (art. 43.3. LPAC).
- d) No se le ofrecerá nada en particular.

25.- Conforme a lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en todo caso, estará obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- a) Las personas jurídicas previstas en el art. 14.4 LPAC.
- b) Quienes ejerzan una labor profesional sujeta a lo dispuesto en la legislación específica según lo dispuesto en el art. 14.5 LPAC.
- c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14.2.d LPAC).
- d) Las entidades sin personalidad jurídica previstas en el art. 15.3 LPAC.

26.- Cuando se produce una falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, y ante supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, ¿qué consecuencias se producirán?:

- a) Se suspenderá el procedimiento administrativo.
- b) Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
- c) Se paralizará la tramitación del procedimiento administrativo.
- d) El procedimiento continuará de oficio mediante un nuevo acto de trámite, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al interesado.

27.- En los procedimientos iniciados por denuncia, cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de la Administración Pública...:

- a) La no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciados la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. (art. 62.3 LPAC).
- b) Deberá incoarse preceptivamente el procedimiento administrativo. (art. 62.3 LPAC).
- c) Deberá remitirse la denuncia al órgano competente por razón de la materia para que con carácter previo a la iniciación del procedimiento proceda a evaluar económicamente el perjuicio patrimonial sufrido. (art. 62.3 LPAC).
- d) La iniciación del procedimiento precisará previa evaluación económica el perjuicio sufrido y se dará traslado de ello al interesado. (art. 62.3 LPAC).

28.- Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrá de practicarse (art. 75.3LPAC):

- a) En la forma que se determine en cada uno de los procedimientos el órgano instructor.
- b) En los plazos y términos previstos en el artículo 33 de la LPAC.
- c) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- d) A través de los medios que resulten menos onerosos para la Administración Pública.

29.- De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

- a) La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de veinte días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
- b) La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
- c) La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de quince días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
- d) La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de diez días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.

30.- De acuerdo con el artículo 413 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

- a) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
- b) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
- c) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de dos a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
- d) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

31.- El artículo 18 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, determina que el plazo de prescripción de las infracciones leves previstas en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será:

- a) De 6 meses.
- b) De 3 meses.
- c) De 1 mes.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

32.- De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- b) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
- c) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

33.- De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no es un medio de ejecución forzosa:

- a) Apremio sobre el patrimonio.
- b) Acciones posesorias.
- c) Multa coercitiva.
- d) Compulsión sobre las personas.

34.- En atención a la clase de suelo afectado, las actuaciones urbanísticas pueden ser, según dispone el art. 118 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

- a) Actuaciones aisladas, Actuaciones integradas, Actuaciones de rehabilitación urbana, Actuaciones de intervención en suelos consolidados.
- b) Actuaciones integradas de transformación urbanística, Actuaciones aisladas en suelo no urbanizable, Actuaciones de intervención en suelo consolidado.
- c) Actuaciones de urbanización, Actuaciones de rehabilitación urbana, Actuaciones de intervención en suelos consolidados total o parcialmente por la edificación.
- d) Actuaciones aislada, Actuaciones integradas o de transformación urbanística, Actuaciones urbanísticas para la obtención de sistemas generales, Actuaciones en suelo no urbanizable, de carácter aislado o en el marco del correspondiente plan especial.

35.- Según el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- b) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- c) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- d) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

36.- A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de:

- a) Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
- b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a quince años.
- c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
- d) Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a quince años.

- 37.- De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento de Régimen Disciplinario de Funcionarios de la Administración del Estado, el nombramiento de Secretario en la tramitación de un procedimiento sancionador:**
- a) Será potestativo siempre y podrá tener la condición de personal laboral fijo.
 - b) Se deberá nombrar un secretario cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija y en todo caso deberá tener la condición de funcionario.
 - c) Se deberá nombrar un secretario cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija y en todo caso podrá tener la condición de personal laboral fijo o de funcionario.
 - d) Será potestativo siempre y podrá tener la condición de funcionario.
- 38.- Según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:**
- a) Hasta un máximo del 40 por 100 para complemento de productividad.
 - b) Hasta un máximo del 20 por 100 para gratificaciones.
 - c) Hasta un máximo del 10 por 100 para complemento de destino.
 - d) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.
- 39.- Según lo establecido en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en:**
- a) Una mejora social que consistirá en todo caso en un 100 por ciento de la base reguladora correspondiente.
 - b) Un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo.
 - c) Un permiso retribuido que consistirá en la percepción económica de unos ingresos económicos siempre que hubieran cubierto el período mínimo de cotización.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
- 40.- Señale cuál de las respuestas es la incorrecta en relación al ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención establecidas en el artículo 36 apartado 1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:**
- a) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
 - b) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
 - c) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
 - d) Ejercer y promover acciones formativas en cualquier materia prevista en un plan de formación sin la necesaria consulta previa en ese caso con el empresario.

41.- Constituye infracción urbanística grave, conforme al art. 278 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

- a) La ejecución de obras de consolidación, aumento de volumen y modernización en edificaciones calificadas como fuera de ordenación.
- b) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad en todos casos.
- c) Los actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, cuando afecten a superficies destinadas a dominio público.
- d) La realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, sin título habilitante, o contraviniendo sus condiciones, cuando tales actos sean legalizables.

42.- Conforme a lo previsto en el artículo 20 apartados 1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes:

- a) Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
- b) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.
- c) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
- d) Alumbrado de vías públicas.

43.- El artículo 190 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que “a efectos de la prestación económica por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente, menores de 18 años, afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se considera situación protegida”:

- a) No se constituye como una situación protegida prevista en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente, menores de 18 años, afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- b) La reducción de la jornada de trabajo de al menos, un 25 por ciento.
- c) La reducción de la jornada de trabajo de al menos, un 50 por ciento.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

44.- Están exentos del Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana según lo dispuesto en el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:

- a) Los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
- b) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- c) El incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél y el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características esenciales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

45.- El artículo 2 apartado 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula que se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que la entrega se realice con contraprestación de los beneficiarios directos e indirectos.
- b) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad particular o interés social o de promoción de una finalidad municipal.
- c) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
- d) Que la entrega se realice sin contraprestación de los beneficiarios. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones formales que se hubieran establecido. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad particular o interés social o de promoción de una finalidad municipal.

46.- Según el art. 15 de la Ley 11/2005, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponde a los Municipios la competencia para conceder las autorizaciones para los espectáculos públicos y actividades recreativas siguientes:

- a) Los festejos taurinos.
- b) Los espectáculos públicos de pirotecnia recreativa o castillos de fuegos de artificio en los que se utilizan artificios pirotécnicos aéreos o dotados de medios de proyección de la carga explosiva, que serán regulados reglamentariamente.
- c) Los espectáculos y actividades recreativas que para su celebración requieran la utilización de la vía pública.
- d) El uso de la vía pública para la realización de pruebas deportivas competitivas organizadas con vehículos, de conformidad con el Reglamento General de Circulación.

47.- El artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece que el Comité de Seguridad y Salud:

- a) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
- b) Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
- c) Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

48.- Los montes de naturaleza especial que, con independencia de su origen, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas y vengán aprovechándose consuetudinariamente en mano común por los miembros de aquéllas en su condición de vecinos:

- a) Se registrarán por la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común.
- b) Se registrarán por la Ley 55/1999, de 12 de noviembre, de Montes Vecinales.
- c) No existen este tipo de montes de naturaleza especial en la legislación de derecho administrativo.
- d) Son bienes patrimoniales de dominio público y se rigen por la Ley 34/2013, de 3 de noviembre, de Patrimonio.

49.- De conformidad con el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que regula el contrato formativo para obtener la práctica profesional adecuada, ¿cuál de las siguientes reglas no es correcta?:

- a) No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.
- b) La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.
- c) La empresa elaborará el plan formativo individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional, y asignará tutor o tutora que cuente con la formación o experiencia adecuada para el seguimiento del plan.
- d) Las personas contratadas no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3.

50.- De conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:

- a) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
- b) El contrato de trabajo de duración determinada sólo podrá celebrarse por circunstancias de la producción.
- c) Se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no responda a los supuestos del Artículo 16.1.
- d) El contrato de sustitución podrá ser también celebrado para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante un proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo.

51.- De conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿qué personas contratadas podrán adquirir la condición de personas trabajadoras fijas?:

- a) Las personas trabajadoras temporales que no hubieran sido dadas de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba.
- b) Las personas trabajadoras que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción.
- c) Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo 15 adquirirán la condición de fijas.
- d) Todas las anteriores son correctas.

52.- Conforme al artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el presupuesto general aprobado inicialmente se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial:

- a) Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones al Alcalde.
- b) Por 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones al Pleno.
- c) Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
- d) Por 1 mes, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

53.- Conforme al artículo 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el control interno que tiene por objeto informar acerca del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos, se denomina:

- a) Control de eficacia.
- b) Función interventora.
- c) Control financiero.
- d) Ninguna es correcta.

54.- Conforme al artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán autorizarse gastos de carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que además se encuentre en uno de los siguientes casos:

- a) Inversiones y transferencias de capital.
- b) Arrendamientos de bienes inmuebles.
- c) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
- d) Todas las anteriores son correctas.

55.- Conforme a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en la estructura del Presupuesto de las entidades locales, el Capítulo I de la Clasificación Económica del Gasto se corresponde con la siguiente denominación:

- a) Inversiones Reales.
- b) Gastos de Personal.
- c) Gastos corrientes en Bienes y Servicios.
- d) Gastos financieros.

56.- El artículo 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula las limitaciones de las transferencias de crédito, señale la respuesta correcta:

- a) Si afectan a créditos de personal pueden minorarse los créditos que hayan sido incrementados con un crédito extraordinario.
- b) Si afectan a créditos de personal pueden minorarse los créditos que hayan sido incrementados con un suplemento de crédito.
- c) Si afectan a créditos de personal no incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración.
- d) Todas las anteriores son correctas.

57.- El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, determina que corresponde a los municipios las siguientes competencias:

- a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías interurbanas, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.
- b) La retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los términos que reglamentariamente se determine.
- c) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías interurbanas por motivos medioambientales.
- d) Todas las anteriores son correctas.

58.- El artículo 87 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, establece que: (Señale la respuesta correcta)

- a) El plazo máximo para que el ayuntamiento resuelva y notifique al interesado la licencia de inicio de actividad será de quince días hábiles contados desde la fecha de su solicitud. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada, el plazo para resolver y notificar será de dos meses desde la fecha de su solicitud.
- b) El plazo máximo para que el ayuntamiento resuelva y notifique al interesado la licencia de inicio de actividad será de 30 días hábiles contados desde la fecha de su solicitud. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada, el plazo para resolver y notificar será de un mes desde la fecha de su solicitud.
- c) El plazo máximo para que el ayuntamiento resuelva y notifique al interesado la licencia de inicio de actividad será de 30 días hábiles contados desde la fecha de su solicitud. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada, el plazo para resolver y notificar será de un dos meses desde la fecha de su solicitud.
- d) El plazo máximo para que el ayuntamiento resuelva y notifique al interesado la licencia de inicio de actividad será de quince días hábiles contados desde la fecha de su solicitud. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada, el plazo para resolver y notificar será de un mes desde la fecha de su solicitud.

59.- Se consideran poderes adjudicadores, a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las siguientes entidades:

- a) Las entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras a) y b) del art. 3.3 que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, financien mayoritariamente su actividad.
- b) Las entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras a) y b) del art. 3.3 que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
- c) Las entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras a), b) y c) del art. 3.3 que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, controlen su gestión.
- d) Las entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras a) y b) del art. 3.3. que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión y nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

60.- Podrán ser objeto del recurso especial, conforme al art. 44.2 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las siguientes actuaciones:

- a) La formalización del contrato.
- b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación.
- c) Las modificaciones del contrato en todos los casos.
- d) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.

61.- Conforme al art. 71.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es circunstancia que impedirá a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 73 la siguiente:

- a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación.
- b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en la ley por causa imputable al adjudicatario.
- c) No contar la empresa con un plan de igualdad.
- d) Haber sido sancionada la empresa por infracción que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado o de falseamiento de la competencia.

62.- Conforme al art. 205.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista en los Pliegos de condiciones, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero del artículo 205, son los siguientes:

- a) Cuando deviniera necesario añadir servicios adicionales a los inicialmente contratados, si el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, e implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 % de su precio inicial, IVA excluido, y se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
- b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, y se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
- c) Cuando la modificación, no supere el máximo del veinte por ciento del precio inicial, y se cumplan los requisitos exigidos reglamentariamente.
- d) Cuando las modificaciones sean sustanciales, siempre que se justifique la necesidad de las mismas, así como las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

63.- En relación a la subcontratación prevista en el art. 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta correcta:

- a) La infracción de las condiciones establecidas en el art 215 LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, darán lugar a la resolución del contrato en todo caso.
- b) Los subcontratistas tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
- c) Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en todo caso naturaleza administrativa.
- d) En los contratos de carácter secreto o reservado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación.

64.- Conforme el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón, podrá denegarse la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación urbana, entre otros motivos de alcance supralocal, por el siguiente:

- a) La incompatibilidad con riesgos, definidos en la normativa urbanística.
- b) El cumplimiento de normas legales y de instrumentos de ordenación prevalentes o de rango superior.
- c) La coherencia del modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural con las políticas de vivienda, de la Comunidad Autónoma.
- d) El respeto y las reservas de espacios para infraestructuras, viviendas y servicios.

PREGUNTAS RESERVA

R1.- Los argumentos de la función BUSCARV de Calc son:

- a) Valor_buscado, matriz_buscar_en, índice y ordenado.
- b) Valor_buscado, matriz_buscar_en, índice, ordenado y operación.
- c) Valor_buscado, matriz_buscar_en e índice.
- d) Valor_buscado, función_destino, índice y ordenado.

R2.-Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) El significado de las siglas EFQM en español es Fundación Europea para la Gestión de la Calidad.
- b) El modelo EFQM de Excelencia se define como una vía para la autoevaluación y la determinación de los procesos de mejora continua en entornos empresariales tanto privados como públicos.
- c) El Modelo EFQM de Excelencia se compone de ocho criterios reunidos en dos grandes grupos: los criterios de Autoevaluación y los criterios de Subproyectos.
- d) La identificación de los puntos fuertes y débiles aplicados a diferentes ámbitos de la organización son el punto de partida para el proceso de mejora continua.

R3.- De acuerdo con la escala establecida en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales ¿Cuántos Delegados de Prevención serán designados en una empresa de 3.001 a 4.000 trabajadores?:

- a) Ocho.
- b) Siete.
- c) Seis.
- d) Cinco.

R4.- De acuerdo con el artículo 14.1 m) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo que por Ley estatal esté atribuida expresamente a otro órgano, corresponde:

- a) Al Alcalde.
- b) Al Alcalde o Concejales en quien delegue.
- c) Al Gobierno de Zaragoza.
- d) Al Pleno.

R5.- El artículo 6 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, enumera los títulos honoríficos de la ciudad de Zaragoza. ¿Cuál de los siguientes títulos no se encuentra entre ellos?:

- a) Muy Benéfica.
- b) Muy Heroica.
- c) Invicta.
- d) Inmortal.

Zaragoza a 17 de marzo de 2023